
Sentencia impugnada:	CJmra Penal de la Corte de Apelacin de San Pedro de Macorçs, del 24 de mayo de 2017.
Materia:	Penal.
Recurrente:	Freddy FernJndez De Jess.
Abogado:	Lic. José Miguel De la Cruz Pia.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En nombre de la Repblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Fran Euclides Soto SJnchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa AgelJn Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de GuzmJn, Distrito Nacional, hoy 26 de diciembre de 2018, aos 175° de la Independencia y 156° de la Restauracin, dicta en audiencia pblica, como Corte de Casacin, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casacin interpuesto por Freddy FernJndez de Jess, dominicano, mayor de edad, unin libre, electrnico, no porta de la cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 4 n.º 12, del sector Los Jardines, de la ciudad de San Francisco de Macorçs, provincia Duarte, imputado, contra la sentencia n.º 125-2017-SSEN-00087, dictada por la CJmra Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de San Pedro de Macorçs el 24 de mayo de 2017, cuyo dispositivo se copia mJs adelante;

Oçdo a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casacin y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oçdo al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oçdo el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador General de la Repblica, Licda. Ana M. Burgos;

Visto el escrito motivado de casacin suscrito por el Licdo. José Miguel de la Cruz Pia, defensor pblico, en representacin del recurrente, depositado en la secretarçsa de la Corte a-qua el 8 de mayo de 2018, en el cual fundamenta su recurso;

Visto la resolucin n.º 3103-2018, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de septiembre de 2018, que declar. admisible en cuanto a la forma, el recurso interpuesto y fij. audiencia para conocerlo el 14 de noviembre de 2018, fecha en que se difiri el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) dçsas dispuestos en el Cdigo Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el dçsa indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley n.º 25 de 1991, modificada por las Leyes n.ºs. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitucin de la Repblica; los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; los artçculos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Cdigo Procesal Penal, modificado por la Ley n.º 10-15 del 10 de febrero de 2015; 295 y 304 del Cdigo Penal Dominicano; y las resoluciones n.ºs. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisin impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

- a) que el 22 de enero de 2016, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, present formal acusacin y solicitud de apertura a juicio contra Freddy FernJndez de Jess, imputJndolo de violar los artculos 295 y 304 del Cdigo Penal Dominicano, en perjuicio de Alfonso Nez Brito (occiso);
- b) que para la instruccin del proceso fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instruccin del Distrito Judicial de Duarte, el cual admiti la acusacin presentada por el rgano acusador y emiti auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante la resolucin nm. 1137-2016-SRES-00031 del 23 de febrero de 2016;
- c) que para la celebracin del juicio fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, el cual dict la sentencia nm. 136-03-2016-SSN-00041 el 11 de julio de 2016, cuyo dispositivo expresa:

“PRIMERO: Declara culpable a Freddy FernJndez de Jess, de cometer homicidio voluntario, en perjuicio de Alfonso Nez Brito, hechos previstos y sancionados por los artculos 294 y 304 del Cdigo Penal Dominicano, por lo que dicta sentencia condenatoria en su contra; SEGUNDO: Condena a Freddy FernJndez de Jess, a cumplir quince (15) aos de reclusin, para ser cumplidos en el Centro de Correccin y Rehabilitacin de Vista al Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorys, por haber sido probada su culpabilidad en la comisin de este hecho; TERCERO: Condena al imputado al pago de las costas penales a favor del Estado Dominicano; CUARTO: En cuanto a la medida de coercin que pesa sobre el imputado, mantiene la continuacin de la misma, por los motivos expuestos; QUINTO: Advierte al imputado, quien es la parte que la decisin le ha resultado desfavorable, que a partir que reciban la notificacin de esta sentencia tienen un plazo de veinte (20) das hbiles para interponer recurso de apelacin en caso que quieran hacer uso del derecho a recurrir, en virtud de las disposiciones de los artculos 393, 394, 416, 417 y 418 del Cdigo Procesal Penal”;

- d) que no conforme con esta decisin, el imputado interpuso recurso de apelacin, siendo apoderada la Cmara Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de San Francisco de Macorys, la cual dict la sentencia nm. 125-2017-SSN-00087, objeto del presente recurso de casacin, el 24 de mayo de 2017, cuyo dispositivo establece:

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelacin interpuesto en fecha siete (7) del noviembre del ao dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. José Miguel de la Cruz, representacin del imputado Freddy FernJndez de Jess, en contra de la sentencia nm. 136-03-2016-00041 de fecha once (11) del mes de julio del ao dos mil dieciséis (2016) dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cmara Penal del Juzgado Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; queda confirmada la sentencia recurrida; SEGUNDO: La lectura de la presente sentencia vale notificacin para las partes presentes y manda que una la secretaria la comunique, advierte que a partir de que les sea entregada una copia íntegra de la presente sentencia disponen de un plazo de veinte (20) das hbiles para recurrir en casacin por ante la Suprema Corte de Justicia, vsa la secretarva de esta corte de apelacin, si no estuviesen conforme, segn lo dispuesto en el artculo 418 del Cdigo Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15”;

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, alega un nico medio de casacin:

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (Art. 426.3 del Cdigo Procesal Penal). Con relacin al medio planteado en apelacin: Contradiccin e ilogicidad manifiesta en la motivacin de la sentencia (Art. 417.2 del CPP). La Corte no respondi suficientemente el medio planteado, sino que se limit a referirse a lo tratado por el tribunal de primer grado, haciendo una relacin de los hechos. (Ver página 8 considerando “7” de la sentencia impugnada). Decimos que la sentencia de la corte est infundada, porque la Corte a-qu a dar respuesta al vicio denunciado por el recurrente, sobre la ilogicidad manifiesta en la motivacin de la sentencia, esta no respondi suficientemente nuestros argumentos en torno al vicio el vicio denunciado. Veamos: El recurrente denunci como vicio, el hecho de que el testigo Daniel Medina dijo al plenario de primera instancia que la vctima estaba armada de unos palitos chinos de pelea; en tanto que la pareja de dicha vctima no estableci nada de eso en su declaracin. Esa contradiccin es importante porque el recurrente pretendi que los jueces de alzada vieran que entre los testigos a cargo existía el interés de presentar a la vctima como que estaba indefensa y que el imputado lleg y le clav la bricha (lo cual visto as es un abuso del imputado contra alguien

que está desarmado). El recurrente llama la atención de que la víctima se estaba armada de unos palitos chinos de pelea, y que esa víctima sabía pelear karate, por lo que la riña entre ellos significaba peligro para el propio imputado. Daniel Medina se expresó al tribunal que la víctima estaba armada, pero esta circunstancia fue considerada como irrelevante por los jueces a quo, en razón de que se consideró desigualdad de armas, pero sin entrar en el detalle de que la víctima sabía pelear karate. La corte de apelación por su lado, hizo suyos los razonamientos de los jueces de primer grado”;

Considerando, que según se extrae del fallo impugnado, la Corte a qua para justificar la decisión, expresó lo siguiente:

“Que en relación al primer motivo de apelación invocado precedentemente, el cual cuestiona que hubo violación al principio de presunción de inocencia en contra del apelante, estiman los jueces de la corte que conocen del caso concreto, que en cuanto a este argumento expuesto en el escrito de apelación debe desestimarse a partir de la siguiente reflexión: primer componente respecto a la argumentación de que el imputado presentaba una herida que se la causó el occiso y el tribunal sentenciador no toma en cuenta este aspecto, precisamente es que en la decisión recurrida se puede apreciar en la página número catorce (14) que el testigo Daniel Medina Betances... Que en torno al argumento oral que expone la parte apelante durante el conocimiento de la audiencia del recurso de apelación por ante la corte que instruye este caso, en el sentido de que el occiso con los palitos provocó una herida al imputado y que este aspecto el tribunal sentenciador no lo ponderó, tal argumento debe ser desestimado a partir del hecho de que quedó probado más allá de toda duda razonable que quien agrede primeramente al occiso es el imputado y de que este se defendía con unos palitos pero qué grado de respuesta letal puede producir unos palitos frente a un ataque mortal con un arma blanca denominada bricha, que sí tiene alto poder letal frente a unos palitos que tenía el occiso, ninguno, por lo que el tribunal de la primera instancia no estaba obligado a valorar un acontecimiento secular que en nada cambia el acontecimiento principal por el que estaba apoderado el juzgado a quo, es decir, del homicidio atribuido al imputado Freddy Fernández de Jesús en contra de quien en vida respondiera al nombre de Alfonso Núñez Brito, hecho punible este que fue debidamente sustentado y probada la participación del imputado en el mismo, conforme dispone el artículo 333 del Código Procesal Penal, relativo a la ponderación de los elementos probatorios y en base a estos adoptar una decisión judicial. Y, el segundo componente de la reflexión de los juzgadores de la segunda alzada, es que el tribunal si presenta los distintos elementos probatorios que fueron utilizados para la realización del juicio y en base a cada uno de ellos como bien expresó precedentemente alcanzan la decisión de condena que se analiza y procede tanto no admitir este primer medio del recurso que se analiza;” (ver numerales 6 y 7 de la decisión de la corte);

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

Considerando, que analizando las reclamaciones del recurso, indica que la Corte ad quem se limita a responder el medio planteado en grado apelativo en el mismo contexto a lo tratado por primer grado. Que al desglose de los requerimientos se revelan cuatro aspectos a examinar: a) Violación a la presunción de inocencia del encartado; b) Errónea valoración probatoria ajustada a la sana crítica y error en la determinación de los hechos; c) Contradicción entre los testigos a cargos;

Considerando, que el referido aspecto del principio de presunción de inocencia ha sido detalladamente analizado por esta Sala, quedando evidenciado que la decisión y motivación brindada por la Corte a qua resulta correcta, al determinar que el imputado se encontraba infringiendo las normas legales preestablecidas que resguarda el derecho a la vida, determinándose gracias al fardo probatorio, el cuadro fáctico, no habiendo cabida a la aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal, al ser destruida su presunción de inocencia fuera de toda duda razonable; siendo de lugar rechazar el referido aspecto impugnativo;

Considerando, que en cuanto a la valoración probatoria y posterior determinación de los hechos, la Corte a qua frente a esta reclamación, precisa en su parte motivacional lo siguiente: *“Que en torno a estas declaraciones la contradicción esencial que le atribuye el recurrente es que mientras en la declaración de Daniel Medina, se registra que el occiso tenía unos palitos con los cuales se defendía, la menor no menciona que su esposo tuviese tales*

palitos pero los jueces de la corte que conocen el caso concreto se preguntan ¿qué relevancia tiene que un testigo dijese que la víctima tenía unos palitos que los utilizaba para defenderse ante la omisión de mencionar este dato por la testigo, esposa del occiso? Para los jueces de la corte que conocen el caso concreto, no existe relevancia alguna, pues cada testigo declara en base de lo que ve, escucha y aprecia con sus sentidos pues la información que importa para la jurisdicción penal es la acción típica realizada por el imputado en contra del occiso sin justificación alguna, pues suponiendo que la víctima hubiese tenido tales palitos no se puede comparar el grado letal de unos palitos ante una bricha con la que se le produce la primera herida a la víctima, generando de inmediato un abundante sangrado y ocasionarle posteriormente una estocada que le produce la muerte a quien en vida respondiera al nombre de Alfonso Núñez Brito; de ahí que no existe contradicción suficiente en tales declaraciones que sean capaces de hacer revertir la decisión última adoptada por los juzgadores de la primera instancia, quienes actuaron apegados al mandato de los artículos 333 y 334 del Código Procesal Penal, relativos a la ponderación de los elementos probatorios y a la redacción de la sentencia en base a las pruebas aportadas en el juicio;" De lo anteriormente transcrito, evidencia la valoración conjunta del panorama probatorio, permitiendo determinar los hechos que fija el fáctico acusatorio, advirtiendo que no posee veracidad jurídica lo reclamado, siendo de lugar desestimar sus argumentaciones en estas vertientes;

Considerando, que en relación a lo argüido por el recurrente, destacamos que entra dentro del poder soberano de los jueces del fondo, la comprobación de la existencia de los hechos de la acusación, la apreciación de las pruebas, las circunstancias de la causa y las situaciones de donde puedan inferir el grado de culpabilidad del imputado; que la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, tiene solo el deber de verificar la apreciación legal de esos hechos y comprobar si los hechos tenidos por los jueces como constantes, reúnen los elementos necesarios para que se encuentre caracterizado el ilícito por cuya comisión han impuesto una pena;

Considerando, que el último ítem denunciado, sobre la valoración de las pruebas, específicamente de los testigos a cargo presentados en el juicio, directos todos en su contenido informativo, la Segunda Sala ha fijado criterio en innumerables sentencias, que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el juicio escapa al control del recurso, que el tribunal de alzada no puede censurar al juez de primer grado la credibilidad dada a las declaraciones de testigos, por depender este asunto de la inmediación; es decir, solo el juez de juicio puede valorar si el testigo declaró tranquilo o nervioso, si fue pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello es que se sostiene que ese punto es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de que no es posible que un tribunal de alzada revise la fiabilidad otorgada por el juez de juicio a un testimonio que la corte ni vio ni escuchó, a no ser que se produzca una desnaturalización de los testimonios rendidos, lo que no ocurrió en la especie, donde a los referidos testigos le fue dada credibilidad en razón de que sus declaraciones se avalaban con otros elementos de pruebas que formaban parte de las actuaciones, por lo que procede desestimar el aspecto de este medio propuesto;

Considerando, que a juicio de esta Sala, la Corte a qua ejerció adecuadamente el control vertical respecto de lo resuelto en el tribunal de primer grado, al valorar y estimar, plasmando adecuadamente sus motivaciones en dicho acto jurisdiccional;

Considerando, que del escrutinio de la decisión impugnada, se comprueba que la corte sólo revisa lo argüido por el recurrente, lo que no responde favorablemente a las peticiones de este, explicándole las razones de la no procedencia de sus reclamaciones, en razón de un fardo probatorio real y presente en el proceso, que lo señala e individualiza dentro del fáctico, quedando comprometida su responsabilidad penal fuera de toda duda razonable, y con esto llevando al traste su presunción de inocencia. Que, esta Segunda Sala no advierte vulneración de índole constitucional al verificar que el grado apelativo realizó una labor que se corresponde con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen las exigencias pautadas; exponiendo de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera, que esta alzada no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, procediendo en tal sentido, a desestimar el recurso que se trata;

Considerando, que en ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por

el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley n.º 10-15 del 10 de febrero de 2015, procede a rechazar el recurso que se trata, confirmando la decisión recurrida;

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximir las total o parcialmente; por lo que, procede dispensarlas en virtud de las disposiciones de la Ley n.º 277-03, que instituye el Servicio Nacional de Defensa Pública, la que contiene el no pago de las costas penales cuando interviene en la asistencia de algún imputado;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley n.º 10-15, y la resolución marcada con el n.º 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Freddy Fernández de Jess, contra la sentencia n.º 125-2017-SSEN-00087, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 24 de mayo de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado anteriormente; en consecuencia, confirma la decisión impugnada;

Segundo: Exime al recurrente Freddy Fernández de Jess, del pago de las costas por estar asistido de la defensa pública;

Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para los fines correspondientes.

(Firmados) Fran Euclides Soto Sánchez.- Esther Elisa Agelín Casasnovas.- Alejandro Adolfo Moscoso Segarra.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaría General, que certifico.